

	JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO NRO. 481

MEDIO DE CONTROL	REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTES	EDISON BECERRA ADAMES Y OTROS
DEMANDADAS	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS
RADICADO	76001-33-33-009-2022-00042-00

I. ASUNTO:

El Despacho procede a estudiar la admisión del medio de control de Reparación Directa (art. 140 CPACA) de la referencia, promovido por **Edison Becerra Adames y otros** contra el **Departamento del Valle del Cauca y otros**.

II. CUESTIÓN PREVIA:

Se advierte que, de acuerdo con el literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad procesal para interponer el medio de control de la referencia es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

No obstante, el precitado término puede ser suspendido hasta por tres meses, según corresponda. Sobre el particular, el artículo 3º del Decreto 1716 de 2009, que reglamentó el capítulo V de la Ley 640 de 2001, sostuvo:

Artículo 3º. Suspensión del término de caducidad de la acción. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta:

- a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
- b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001, o
- c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.

Así las cosas, una vez revisada la demanda y sus anexos, se advierte que el hecho que motivó el medio de control de la referencia acaeció el **8 de diciembre de 2019** - fecha en la que falleció la señora **Dora Luz Montoya Gamez** (q.e.p.d.) -, motivo por el que es claro que la fecha límite para instaurar la demanda era el día **9 de diciembre de 2021**.

No obstante, como consecuencia de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el Gobierno Nacional, con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, fue expedido el Decreto Legislativo 564 de 2020, por el cual se adoptaron medidas para garantizar los derechos de los usuarios del sistema de justicia, decretando la suspensión de términos de prescripción y caducidad, así:

Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante

los tribunales arbitrales, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.

En concordancia con lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 al 20 de marzo de la misma anualidad.

A su vez, el Consejo Seccional de la Judicatura por Acuerdo nro. CSJVAA20-15 del 16 de marzo de 2020, autorizó el cierre extraordinario de los despachos judiciales ubicados en el Valle del Cauca y San José del Palmar en el Departamento del Choco, desde la misma calenda hasta el 20 de marzo de la presente anualidad; medidas que se prorrogaron a través de diferentes actos administrativos, hasta el 30 de junio de 2020, pues el Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, ordenó el levantamiento de los términos, a partir del 1º de julio de 2020.

Por su parte, el Consejo de Estado al referirse a la suspensión de términos y su incidencia frente al requisito de procedibilidad que se debe adelantar ante el Ministerio Público, dispuso¹:

4.6.2. Preciado lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, toda vez que desconocieron artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020, cuya aplicación a la luz del derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, permite concluir que la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Gobierno Nacional, con el fin de contrarrestar los efectos de la pandemia frente al acceso a la administración de justicia, tiene incidencia, igualmente, en el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, aun cuando la Procuraduría General de la Nación no hubiera dispuesto la suspensión de los términos administrativos para la presentación de conciliaciones prejudiciales, posibilidad que otorgaba el artículo 9 del Decreto Legislativo 491 de 2020, norma que no resultaba aplicable en este caso para abordar el análisis de la caducidad de la acción.

(...)

Para la Sala, esa determinación desconoce el artículo 1 del Decreto Legislativo 564 de 2020 que dispuso la suspensión de los términos de caducidad y prescripción para efectos judiciales, por lo que la circunstancia de que la Procuraduría General de la Nación no hubiera suspendido los términos para la recepción de las solicitudes de conciliación prejudicial, no puede entenderse como una autorización para no descontar el término de tres (3) meses y catorce (14) días de suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta que esa fue la premisa normativa de la referida disposición que, se reitera, es aplicable a este caso concreto y permite garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia de los demandantes.

Conforme con lo anterior, por motivo de la pandemia, los términos judiciales y los plazos de prescripción (de derechos) y caducidad (de los medios de control) se suspendieron desde el 16 de marzo de 2020 y se reanudaron a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesó la suspensión. De igual modo, en el Acuerdo PCSJA20-11567, los términos estuvieron suspendidos hasta el 30 de junio de 2020 y, por ende, se reanudaron el 1 de julio siguiente. (Subrayas por el Despacho).

¹ Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejera Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. Providencia del 10 de febrero de 2022. Radicación nro. 11001-03-15-000-2021-05281-01.

En ese orden de ideas, sea lo primero indicar que, de acuerdo a la jurisprudencia precitada, el necesario señalar que el Juzgado procede a cambiar su posición frente a la suspensión de términos debido a la declaratoria de emergencia y, en consecuencia, adoptará la posición anterior, razón por la que se tiene que el término comprendido entre 16 de marzo de 2020, inclusive, hasta el 30 de junio, inclusive, de esa anualidad fueron suspendidos por un periodo de tres (3) meses y catorce (14) días calendario, los cuales se reanudaron el 1° de julio.

Sobre la contabilización del término de caducidad, el máximo Tribunal de cierre de esta jurisdicción ha precisado²:

(...), cuando el término fijado en la norma se exprese en meses, debe contabilizarse según el calendario, y no se interrumpe por el cese de actividades ni la vacancia judicial, salvo que el plazo expire durante esos eventos, caso en el cual el término se prorroga hasta el primer día hábil siguiente³.

En ese entendido, el término de caducidad de la acción debe computarse según el calendario, y solo en el evento de que la acción venza en un día en que los despachos judiciales no se encuentren prestando sus servicios, se debe extender hasta el primer día hábil.

Así pues, si bien la providencia precitada hace alusión a meses, es claro que ello opera en la misma medida y forma cuando la norma haga alusión a años.

A partir de lo anterior, se tiene que, si bien el término para interponer el medio de control de la referencia fenecía el **9 de diciembre de 2021**, lo cierto es que, de acuerdo a la suspensión de términos referida, este se extendió hasta el **23 de marzo de 2022** y el medio de control fue radicado el **23 de febrero** de esta anualidad, es decir, en término.

III. COMPETENCIA:

Este Despacho es competente en primera instancia para conocer del presente proceso, por la naturaleza del asunto, de conformidad al numeral segundo del artículo 155 del CPACA, por el factor territorial, fijado por el numeral tercero del artículo 156 ibídem y por la cuantía, en los términos del artículo 157 de la norma en cita.

III. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo previsto en los artículos 161 a 167 del CPACA, revisada la demanda y sus anexos, se advierte que la parte demandante deberá:

- Informar el canal digital donde puedan ser notificados los testigos, de conformidad con el inciso primero del artículo 6° del Decreto 806 de 2020 (Hoy artículo 6° de la Ley 2213 de 2022).

En consecuencia, el Despacho inadmitirá la demanda y concederá un plazo de diez (10) días a la parte demandante para que la subsane, so pena de ser rechazada (art. 170 CPACA). Se reitera que el escrito de subsanación deberá ser remitido, de manera simultánea, a la demandada, de acuerdo a lo precitado por el numeral 8° del artículo 162 ibídem.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI**,

² Consejo de Estado. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Jorge Octavo Ramírez Ramírez. Providencia del 4 de diciembre de 2014. Radicación nro. 25000-23-27-000-2011-00220-01(19148).

³ En sentido similar se pronunció esta Sala en providencia del 14 de agosto de 2013, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez (E), expediente No. 2011.

RESUELVE:

PRIMERO: INADMITIR el medio de control promovido por **Edison Becerra Adames y otros** contra el **Departamento del Valle del Cauca y otros**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER a la parte demandante un término de diez (10) para que subsane la demanda, so pena de rechazo (art. 170 CPACA).

TERCERO: El escrito de subsanación deberá remitirse, de manera simultánea, a la demandada y al correo electrónico of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co, en los siguientes formatos:

Tipo de contenido	Formato estándar	Extensión
Texto	PDF	.pdf
Imagen	JPG, JPEG, JPEG2000, TIFF.	.jpeg, .jpg, .jpe, .jpg2, .tiff
Audio	MP3, WAVE.	.mp3, .wav
Video	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.	.mpg, .mp1, .mp2, .mp3, .m1a, .m2a, .mpa, .mpv, .mp4, .mpeg, .m4v

CUARTO: INFORMAR a las partes que el expediente de la referencia, puede ser consultado de manera digital, a través del Sistema de Gestión Judicial SAMAI, en el siguiente hipervínculo:

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333009202200042007600133

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MIRFELLY ROCIO VELANDIA BERMEO

JUEZ

Providencia firmada electrónicamente. Su autenticación podrá ser validada en el siguiente link:

<https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/validador.aspx>

Dmam